

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



Fuerzas
estadounidenses
alertas en contra del
cartel de los soles

El guardián

Concepción
15 de octubre 2025
\$450



Se intensifican enfrentamientos por
Nobel de la Paz

Venezuela: el mar sitiado y las costas del silencio

El Caribe vuelve a ser territorio de tensiones. En el horizonte azul que separa a Venezuela de sus vecinos inmediatos ya no ondean banderas de pesca ni de comercio, sino los emblemas de buques de guerra. Las fuerzas militares venezolanas han sido desplegadas en las costas orientales y del Caribe con el argumento de "combatir el narcotráfico", mientras Estados Unidos y aliados regionales patrullan la zona bajo la bandera de operaciones antidroga. Entre la bruma política y el rugido de los motores navales, emerge la misma pregunta de siempre: ¿quién protege realmente a la población venezolana atrapada entre la retórica del poder y el fuego cruzado de las potencias?

El pasado 7 de octubre, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el despliegue de aproximadamente 15.000 efectivos de la Armada Bolivariana y unidades de la Fuerza Aérea en el Caribe y el Golfo de Venezuela, como parte de su "Plan Nacional de Defensa Antinarcóticos y Soberanía Marítima". La operación se activó tras varios enfrentamientos con embarcaciones no identificadas y, especialmente, después de que Estados Unidos reconociera haber bombardeado una sexta lancha sospechosa de narcotráfico, dejando seis muertos en aguas internacionales próximas a La Orchila. Washington justificó la acción

alegando la persecución de "redes vinculadas al Cártel de los Soles", mientras Caracas denunció una provocación y una violación directa de su soberanía marítima.

Mientras tanto, el mar se ha convertido en escenario de maniobras cruzadas, sobrevuelos de reconocimiento y tensión diplomática. Pescadores de Sucre y Nueva Esparta afirman que sus faenas han disminuido más de un 60 % desde el inicio de las operaciones. En los pueblos costeros, el sonido de las lanchas militares reemplaza al de los motores pesqueros, y el miedo reemplaza al sustento.

En los estados costeros, la militarización no ha traído seguridad, sino parálisis. Las restricciones al movimiento marítimo, la incautación de embarcaciones menores y los controles aleatorios han afectado a cientos de familias que viven de la pesca artesanal o del comercio

interinsular. Más de 25.000 personas han abandonado las zonas costeras de Sucre, Delta Amacuro y Anzoátegui desde agosto de 2025, desplazadas por temor o por la pérdida de sus medios de subsistencia. La "guerra contra el narcotráfico" parece haberse trasladado del discurso a la vida cotidiana: retenes militares, registros de embarcaciones, bloqueos de combustible y un mar que ya no se navega, sino que se teme.

En este tablero de tensiones, Brasil y Colombia han optado por una diplomacia

de bajo perfil, pero no de silencio. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declaró desde Belém que su país “no acompañará ningún tipo de escalada militar en el Caribe”, aunque expresó preocupación por “el uso del narcotráfico como pretexto para intervenciones extranjeras”. Brasil defiende la vía del diálogo y ha ofrecido mediar discretamente entre Washington y Caracas para evitar incidentes mayores. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó con un tono más crítico hacia Estados Unidos, afirmando que “la lucha contra las drogas no puede ser una guerra eterna en mares ajenos”. Ambos países coinciden en un punto esencial: la militarización de la región no resolverá el tráfico de drogas, solo trasladará el conflicto a las poblaciones más vulnerables.

El factor que completó el cuadro político fue la decisión de México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, de mantener distancia diplomática frente a la Cumbre de las Américas convocada en Miami. La presidenta mexicana señaló que “no se puede hablar de democracia mientras se excluye o se sanciona a pueblos enteros”, en referencia a las tensiones entre Washington y Caracas, La Habana y Managua. Aunque México no confirmó oficialmente su ausencia, su posición crítica fue interpretada como un gesto de autonomía regional y un rechazo simbólico a la política exterior estadounidense.

Mientras los gobiernos discuten soberanía y legitimidad, el drama humanitario avanza en silencio. La Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, y que al menos 400.000 viven hoy en zonas costeras precarias o en tránsito hacia islas vecinas. Las nuevas restricciones

**los discuten soberanía y
la humanitario avanza en**
marítimas han
cerrado rutas
informales de
migración,

empujando a muchos a travesías más peligrosas. La militarización costera, en lugar de frenar el contrabando, ha empujado a las redes criminales hacia zonas más densamente pobladas, donde el control estatal es mínimo y la violencia cotidiana, máxima.

El Caribe se ha transformado en un espejo de las tensiones continentales. Washington actúa con la lógica del control y la fuerza; Caracas responde con la del nacionalismo; y las democracias sudamericanas, atrapadas entre ambos polos, oscilan entre la prudencia y la incomodidad.